

La peor crisis económica del país

El poder adquisitivo de la moneda se redujo en más del 450%

El pueblo ante alternativas de imprevisibles consecuencias

La crisis económico-financiera que confronta el país calificada como la más grave desde los inicios de su vida republicana, se agudizó durante los siete primeros meses de este año, a consecuencia de las medidas dictadas por el Gobierno del Gral. Celso Torrelío Villa, el 5 de febrero y el pasado 22 de marzo.

Las medidas económicas de febrero que devaluaron el peso boliviano en un 76% y la flotación del dólar americano impuesto por el Gobierno a sugerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) que redujo el poder adquisitivo del dinero en más del 450%, configuraron una situación "desesperada" para los sectores mayoritarios del país, acentuaron la desocupación y el hambre en el pueblo y originaron una contracción significativa en la actividad económica.

La situación de iliquidez generalizada en las empresas del sector estatal y privado incidió también en la producción e importaciones, en la elevación de precios de bienes y servicios que se comercializan en el mercado interno y en el número del personal ocupado.

El pueblo boliviano se enfrentó una vez más, a la dolorosa experiencia de cargar sobre sus espaldas los errores de los gobernantes las consecuencias de una deuda contraída en la década del 70 durante el régimen militar del Gral. Hugo Banzer Suárez y la corrupción denunciada contra los posteriores gobiernos de facto.

En el primer semestre de 1982, la población evidenció también la injerencia directa del Fondo Monetario Internacional (FMI), que a través de sus misiones evaluadoras, sugirió la política que debía seguir el Gobierno en materia económica como condición para conceder al país un Stand By de 119 millones de dólares que nunca llegó.

La indiferencia del FMI, fue factor importante para el rechazo de las solicitudes de crédito que presentó en varias oportunidades el Gobierno ante organismos financieros.

Bolivia se debatió y aún se debate ante una crítica situación económica que origina un malestar en las organizaciones políticas, sindicales y pueblo en general, de imprevisibles consecuencias.

ENERO: PRIMERAS MEDIDAS ECONOMICAS

ENERO: SE INICIA UN AÑO ACIAGO PARA BOLIVIA EN EL CAMPO ECONOMICO.— ANUNCIO DEL REORDENAMIENTO DE LA ECONOMIA NACIONAL EN 1982.

Gobierno congela precios de los principales artículos, pero ratifica la adopción de correctivos económicos. Ministro de Finanzas, Javier Alcoreza Melgarejo viaja al exterior en procura de obtener créditos de organismos internacionales.

PRIMERA FASE DEL PLAN TRIENAL ES REORDENAR LA ECONOMIA

Con motivo de Año Nuevo, el Presidente de la República, General Celso Torrelío Villa, anuncia en su mensaje a la Nación, el reordenamiento de la economía durante 1982 puntualizando: "La prioridad asignada al reordenamiento y reactivación de la economía se fundamenta en las consecuencias de orden social, resultantes de la crisis, que se muestran con toda su crudeza, en un mayor desempleo, en la falta de insumos para la industria y en una escalada peligrosa de los niveles de precios internos.

Días atrás, el Presidente del Banco Central de Bolivia, Guido Salinas, había manifestado que la única solución para el país, es la adopción de la flotación del dólar.

Los inicios del año 1982, se caracterizan ya por expresiones de protesta ante una medida que provocará el caos económico más grave de la historia", según advierte el Colegio de Economistas de Bolivia.

El presidente de ese cuerpo colegiado, Walter Mur Gutiérrez, critica la posición del Banco Central de Bolivia, señalando que la flotación del dólar originará "continua elevación de precios, costos y salarios una situación social cada vez más conflictiva, la desnacionalización de la economía y la formación de un superestado privado dentro del Estado".

Por su parte, los organismos técnicos del Ministerio de Finanzas, estudian las medidas económicas y expresan su preocupación por los compromisos que el país debe cumplir respecto a la deuda externa.

El titular de Finanzas, Javier Alcoreza Melgarejo, afirma que las medidas económicas serán "lamentablemente antipopulares", pero sostiene que las medidas que se estudian implementarán un sistema "conveniente para que la carga sea compartida y trate de favorecer a los sectores de ingresos fijos".

Reitera también que el país está en condiciones de cancelar sus compromisos con la deuda externa hasta fines de 1982. Asimismo, rechaza la injerencia del FMI en la política económica del país, afirmando que "lo único que recomienda ese organismo internacional es corregir la balanza de pagos".

Los anuncios de nuevas medidas económicas, originan en el país, la especulación de precios y un incontrolable alza en los artículos de primera necesidad.

Por otra parte, informaciones del exterior, dan cuenta de un préstamo para el Banco Central de Bolivia de 30 millones de dólares, por parte de los bancos interamericanos que integran el "Acuerdo de Santo Domingo", firmado por los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

La tercera semana de enero, se caracteriza por la manifestación de diversos sectores de la población sobre las medidas económicas que dictará el Gobierno. Diferentes criterios sobre lo que convendría al país se publican en la prensa.

La mayoría opina que la flotación del dólar no conviene al país.

Confirmando los rumores en torno a la injerencia del FMI en los correctivos que dictará el Gobierno, el Ministro de Informaciones, Jaime Humérez Selemé, señala que ese organismo internacional ha planteado algunas recomendaciones "sobre lo que debería hacer el Gobierno para superar la crisis económica".

En clara muestra de una política demagógica el gobierno anuncia días después, la rebaja de impuestos a la renta de servicios personales, como "una forma de contribuir en la solución del problema económico de los bolivianos".

A mediados de enero, las reuniones "de alto nivel", se intensifican a fin de analizar la situación económica y los futuros correctivos.

En la Avenida Camacho de La Paz, se continúa operando el mercado paralelo, el dólar se cotiza a 43.50 pesos bolivianos, mientras que el precio oficial es de 25.

El Gobierno exhorta al pueblo a mantener la serenidad y recomienda que se evite la angustia, porque, según enfatiza el Ministro de Informaciones, Humérez, "el pueblo no será afectado".

Por segunda vez, la Cámara Nacional de Minería se pronuncia a favor de la promulgación de medidas destinadas a incrementar la producción, "Ningún sistema devaluatorio solucionará la crisis si no se dictan medidas para fomentar la producción y productividad", dice.

Como muestra de la injerencia directa sobre los problemas económicos, el Fondo Monetario Internacional, envía al economista norteamericano William Driscoll, que en conferencia de prensa afirma que al país no le queda otra salida que el de la flotación del dólar. "Deben ser aceptadas las realidades del FMI", agrega.

En lo que puede llamarse una respuesta al criterio expresado por el norteamericano, la Cámara Nacional de Industrias opina en favor del precio fijo para el dólar.

Desde el Ministerio de Finanzas, se anuncia la creación de una Junta Nacional de Abastecimiento y Control de Precios, que tendrá poca participación en el freno a la especulación.

Asimismo, desde el palacio de Gobierno, el Presidente Celso Torrelío, afirma que las reservas del Banco Central son mínimas, por lo que no se pueden tomar aún las medidas económicas, pero asegura que el problema económico atinge a la nación gravemente.

En La Paz, el ampliado de Cámaras de Construcción expresa su preocupación por las medidas económicas, afirmando que la flotación "le varía al desastre a la industria de la construcción".

El sector de la industria manifiesta por su parte, las dificultades por las que atraviesa ante la falta de divisas. El Gobierno, a través de un comunicado oficial, señala que "no escatima esfuerzos para lograr soluciones a la crisis. "Las Fuerzas Armadas de la acción coyunturalmente en función de Gobierno, asumiendo la grave responsabilidad de superar la negativa y crítica situación económica actual. Tanto el gabinete ministerial y el Alto Mando Militar están abocados a que la solución no afecte directa o exclusivamente a las clases mayoritarias", señala.

Paralelamente, se conoce en La Paz, el viaje del Presidente del Banco Central Guido Salinas a Washington, con el fin de elevar al FMI la solicitud del Gobierno de un soporte económico para las medidas a dictarse.

El titular de Finanzas, afirma por su parte, que el país recibe 138 ofrecimientos de crédito, 10 por semana, pero que las mismas no cuentan con garantía.

El coronel Javier Alcoreza Melgarejo anuncia también la sanción a las especulaciones en la compra-venta de divisas en el mercado paralelo. Los cambistas aceptan, luego de una reunión con autoridad a mantener el dólar en 45 pesos como precio tope.

En Santa Cruz, la moneda extranjera desaparece del mercado paralelo. Los cambistas esperan la subida en el precio del dólar para reaniciar sus operaciones.

El sábado 23 de enero, el Ministro de Finanzas, viaja a Washington con el propósito de concretar un crédito con organismos internacionales. Posteriormente, se traslada a Suiza donde gestiona también nuevos préstamos.

El ministro Javier Alcoreza Melgarejo, retorna al país el sábado 30 de enero, fecha en la que el Gobierno anuncia también la adopción de las medidas para próximos días.

FEBRERO: EL GOBIERNO DEVALUA LA MONEDA Y DICTA MEDIDAS "DURAS PARA EL PUEBLO".

Tras ocho horas de deliberaciones en Palacio Quemado, el Presidente de la República, anuncia el 5 de febrero la devaluación del peso boliviano. El dólar es fijado en 44 pesos bolivianos la moneda nacional se devalúa en un 76% con respecto al precio anterior de la divisa: 25 pesos.

El plan de reordenamiento económico y financiero iniciado por el Gobierno, establece la vigencia de 20 decretos referidos al incremento de un bono extra para los funcionarios, el alza en las tarifas del servicio eléctrico y de la gasolina del kerosene y del gas.

Sólo se congela el precio de cinco productos de la canasta familiar: el plan de batalla, harina de trigo, arroz, azúcar y la leche nacional.

Se adoptan también precios máximos para otros artículos. Torrelío advierte que pese al nuevo tipo de cambio, continuará el control de divisas por parte del Banco Central, advierte que el dólar será escaso pero llama, a la reflexión para que el "pueblo asuma con responsabilidad las nuevas medidas".

En su discurso, el Presidente puntualiza que la crisis fue motivada por "la mala orientación y uso dados a los créditos externos, la inactividad productiva del país, y el incumplimiento de

las obligaciones financieras externas. Además de las elevadas tasas de interés aceptadas para la deuda externa a corto plazo, la exorbitante importación de bienes suntuarios, el mal uso o abuso de nuestras materias primas, la anarquía de grupos políticos que propiciaron paros, huelgas que perjudicaron la producción, la fuga de reexportación de capitales que mermaron el ahorro interno y redujeron la capacidad de inversiones propias".

Citó asimismo a la "ausencia de una adecuada política de producción, el desbordamiento del narcotráfico, y los efectos de la crisis económica mundial" como factores que incidieron en la situación financiera del país.

En previsión a manifestaciones de protesta, el Gobierno dispone la paralización de las actividades tanto públicas como privadas en todo el país para el día 6 de febrero.

El siete, se conoce ya el incremento de tarifas en el sector del autotransporte. Las medidas crean expectativa y temor en la población. Los comerciantes, aprovechando esta situación, ocultan los artículos de primera necesidad y los mercados se desabastecen. Ese mismo día, la Central Obrera Boliviana, decreta un paro general a nivel nacional en protesta contra las medidas económicas, que son calificadas como "un atentado contra la economía popular".

Sin embargo, el Gral. Celso Torrelío, en declaraciones a la prensa afirma que las medidas fueron recibidas por la población "con beneplácito". Paralelamente, el Ministro de Informaciones Jaime Humérez, sostiene que el pueblo boliviano recibió las medidas "con serenidad encomiable".

En conferencia de prensa, ofrecida por el titular de Informaciones y el Ministro Secretario de la Presidencia, Juan Carlos Durán, los portavoces oficiales del Gobierno, explican los alcances de los correctivos.

Se anuncia, que el Gobierno continúa sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a fin de conseguir el soporte económico de 119 millones de dólares, destinado a equilibrar la deficitaria balanza de pagos.

En esta misma época, trabajadores del Banco Central de Bolivia, denuncian la venta ilegal de dólares a 25 pesos bolivianos, días antes de dictarse la devaluación monetaria. El Contralor de la República, Antonio Ojando Rojas, afirma que los funcionarios del Instituto Emisor implicados en esa operación "dolosa", serán procesados.

El Comité interbancario señala también que la adopción de la medida devaluatoria "es un error del Gobierno, por cuanto no existen reservas suficientes para hacer frente a las consecuencias".

El Ministro de Finanzas, revela en efecto, que las reservas del Banco Central de Bolivia son bajas, pero reitera que no es la primera vez que se toman medidas económicas de ese tipo en una situación coyuntural similar".

Señala como ejemplo la devaluación dictada por el gobierno del Gral. Hugo Banzer Suárez "inclusive, se adoptaron esas disposiciones cuando el país tenía reservas monetarias mucho más bajas", dice.

Por otra parte, anuncia la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), destinada a analizar la situación por la que atraviesa el país.

El 12 de febrero, el Cnl. Javier Alcoreza Melgarejo, califica de duras las medidas económicas adoptadas por el Gobierno al que colabora. Consultado sobre el comportamiento de las mismas, señala que aún es imprevisible.

La primera semana de vigencia de las medidas económicas, se caracteriza por los paros y huelgas de los sectores laborales, en protesta por los correctivos. El Ministro del Interior, Cnl. Romulo Mercado Garnica, afirma que la población se comportó en forma pacífica y que las protestas se realizaron sin "lamentar confrontaciones".

Paralelamente al acentuamiento de la crisis, se intensifican las denuncias de desfalcos y fraudes al Estado. El Contralor General de la República afirma que por juicios coactivos se adeuda al Estado más de 100 millones de dólares.

La autoridad puntualiza que la crisis económica se acentuó por la pérdida de la moral en las funciones administrativas, ejecutivas y de gobierno.

A mediados de febrero, el Ministro de Planeamiento y Coordinación, Adolfo Linares, viaja a Washington "en misión especial de gobierno", extraoficialmente se sabe que negocia ante el Directorio del FMI, el Stand By de 119 millones de dólares.

En La Paz, el Ministro de Finanzas, Javier Alcoreza Melgarejo, puntualiza que "Bolivia no negociará de rodillas ante organismos internacionales". Defenderemos siempre nuestras materias primas y la bolivianidad de nuestras empresas, agrega.

Exhorte asimismo a las Fuerzas Armadas "de la carga de responder por los errores que pueda cometer el ministro de Finanzas". Reconoce la autoridad que "la responsabilidad que asumo es tarea que sobrepasa mis fuerzas".

El jueves 18, el Gobierno informa oficialmente acerca de las negociaciones que realiza en Washington el ministro Adolfo Linares, para conseguir el soporte económico o Stand By de 119 millones de dólares.

Según se informa, las negociaciones con el FMI datan de principios de 1981. Desde esa fecha, tres misiones evaluadoras llegan al país. La última misión, encabezada por Marcelo Caiola Carl Johann Lindgreen (representante para Bolivia) y Carlos Tandestares, había sugerido al Gobierno la adopción de la flotación del dólar americano como "una salida para enfrentar la crisis".

El viernes 19 se conoce que el Ministro de Planeamiento gestiona ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, crédito

los por un valor de 300 millones de dólares.

El Banco Central de Bolivia, en su Encuesta de Coyuntura, resume la situación a la que se enfrentarán las empresas estatales y privadas "un futuro nada halagüeño ya que la economía presentará un estancamiento", afirma.

El miércoles 24, el Ministro Adolfo Linares, ofrece una conferencia de prensa, donde explica las gestiones realizadas en su viaje a Washington. Bolivia solicitó mediante esa autoridad crédito por 346 millones de dólares, al Banco Mundial y al Banco Interamericano para poner en ejecución programas de desarrollo destinados al sector ganadero, agrícola, minero, e industrial.

El Ministro anuncia también la llegada al país de una misión del Fondo Monetario Internacional, con que viene con el propósito de estudiar las incidencias de las medidas dictadas por el Gobierno.

El domingo 29 de febrero, llega al país la misión del Fondo Monetario Internacional, presidida por Juan Carlos Iarezza, representante de ese organismo para el área de Bolivia y Marcelo Caiola. El director ejecutivo, Juan Carlos Iarezza, señala que el FMI realizará todos los esfuerzos para conceder al país el soporte económico que requiere.

MARZO: NUEVAS MEDIDAS ECONOMICAS. EL GOBIERNO IMPLANTA FLOTACION DEL DOLAR A SUGERENCIA DEL FMI.

El mes de marzo, significa para el país un cambio en el modelo económico, frente al fracaso de la devaluación monetaria y la incapacidad del Banco Central de atender las demandas de divisas del sector productivo estatal y privado. La Central Obrera Boliviana decreta un paro de 48 horas, que es acatado en todo el territorio nacional.

El lunes primero de marzo, se informa que la misión del FMI, permanecerá en el país por espacio de tres semanas a fin de estudiar la situación económica y el comportamiento de las medidas devaluatorias dictadas por el Gobierno.

En sus primeras entrevistas con el Ministro de Finanzas, Javier Alcoreza Melgarejo, la misión evaluadora, sugiere que el Gobierno debe retirar las subvenciones a los principales artículos de la canasta familiar.

El titular de Finanzas, luego de la entrevista con los representantes del Fondo, informa que el déficit fiscal del país ascenderá durante esta gestión por las subvenciones que se otorgan a diferentes productos a través del Tesoro General de la Nación. El déficit ascenderá a 153 millones de dólares, dice la autoridad.

El miércoles 3 anuncia que el Banco Central de Bolivia adoptará un sistema de distribución de divisas en base a las prioridades de los sectores productivos, debido a que el Instituto Emisor se enfrenta a una limitada existencia de reservas.

El jueves 4, el Director Regional del FMI para Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Perú afirma que el FMI no recomendó una flotación del dólar. Tal situación, según dijo, debe adoptarse en base a las características de cada país, "habría que ser boliviano para comprender esta situación", dice. Aclara que el Fondo Monetario está dispuesto en todo momento a cooperar al país, pero señala que el Gobierno boliviano y el pueblo en general deben estar dispuestos a sacrificarse para encontrar la solución.

Califica la economía boliviana como "sana y buena, aunque advierte que existirán problemas a corto plazo". Iarezza emite estas declaraciones luego de la entrevista sostenida con el Presidente de la República, Celso Torrelío Villa.

El lunes 8, empleados del Ministerio de Finanzas, a nombre de los trabajadores del Estado, expresan su preocupación por la inflación descontrolada, el costo de vida y la desproporción entre el encarecimiento de los artículos de primera necesidad y el bono "compensatorio", otorgado por el Gobierno.

"Nos esperan días de sufrimiento y pobreza. Los aumentos son ridículos frente al alza del costo de la vida, que se produjo sin interrupción desde hace años, especialmente en las dos últimas gestiones".

El martes 9, se informa que la misión del FMI, analiza con 4 comisiones técnicas del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, el desequilibrio existente en la balanza de pagos, la situación monetaria del país, el sector crediticio y otros problemas que confrontan las empresas privadas y públicas.

El mismo martes llega al país una misión del Banco Mundial, Scherer Teler, Jefe de la División para Argentina y Bolivia, afirma que ese organismo otorgaría un crédito de 125 millones de dólares "si la evaluación confirma que las medidas económicas del pasado 5 de febrero son positivas".

Por otra parte, se informa oficialmente que el Banco Interamericano de Desarrollo, otorgará al país un crédito destinado a la construcción del gasoducto Santa Cruz - Altiplano. El Ministro de Finanzas, Javier Alcoreza Melgarejo suscribirá con ese organismo en la reunión de Gobernadores que se realizará en Cartagena, señalan fuentes oficiales.

El viernes 12, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos solicita al Gobierno la derogación de algunas de las disposiciones emitidas el 5 de febrero "por la crítica situación económica que confronta esa empresa ante las medidas devaluatorias".

Paralelamente, trabajadores de la empresa estatal petrolera, denuncian los elevados sueldos que perciben los ejecutivos de esa entidad.

Se conoce también ese mismo día, los propósitos del Gobierno de replantear ante el FMI los requerimientos financieros del país.